



Entre el destrabe y la incertidumbre:

El nuevo rumbo de la minería y energía en Chile

El arranque del gobierno del Presidente José Antonio Kast marcó un punto de inflexión en el sector energético y minero del país. Uno de los movimientos más significativos ha sido la decisión de retirar decenas de decretos supremos del Ministerio de Medio Ambiente, desde la Contraloría General de la República para su revisión, algunos de los cuales tienen una relación directa con el quehacer de la industria minera y energética.

Esta señal, que apunta a un “reset regulatorio”, abre espacio -según explicaron las nuevas autoridades- para corregir lo que estimen necesario y agilizar normas clave. Sin embargo, también introduce una cuota de incertidumbre en el corto plazo, en momentos en que la industria requiere reglas claras para sostener su pipeline de inversiones, particularmente en transmisión, generación distribuida y almacenamiento.

En paralelo, el foco en acelerar el estancamiento de proyectos -muchos de ellos detenidos por años- refleja una estrategia directa: acelerar la materialización de inversiones por miles de millones de dólares. En minería, esto se traduce en una agenda orientada a reducir tiempos de permisos, fomentar la exploración y fortalecer la competitividad del país frente a otros distritos mineros.

En el ámbito energético, el gobierno ha optado por reforzar señales de mercado. La decisión de traspasar con mayor fuerza las variaciones internacionales a los precios de los combustibles marca un quiebre respecto a las políticas de estabilización de precios. Si bien esta estrategia apunta a fortalecer la disciplina

fiscal, también tensiona el escenario social y productivo, obligando a implementar medidas de mitigación focalizadas para contener sus efectos.

A este escenario se suma un elemento clave: la interacción entre esta agenda pro inversión y el desarrollo de la transición energética, que también atañe a la minería. Si bien el impulso a proyectos puede acelerar la incorporación de nueva capacidad, especialmente en generación renovable y minería de minerales críticos, la ausencia -al menos inicial- de definiciones claras en planificación energética de largo plazo podría generar desalineamientos, por lo que resulta necesario no dejar de lado la actualización de este proceso.

A nivel institucional, los nombramientos y el enfoque adoptado refuerzan una lógica de gestión económica, con un discurso explícito para la aceleración de la inversión privada. Esto puede traducirse en mayor dinamismo en la toma de decisiones, pero también exige una coordinación fina para evitar desalineamientos regulatorios o conflictos entre objetivos de crecimiento y sostenibilidad.

El éxito de esta estrategia dependerá de su capacidad para reducir la incertidumbre normativa, mantener estándares ambientales robustos y gestionar adecuadamente las tensiones sociales. Chile vuelve a apostar por la inversión como motor, pero el equilibrio entre velocidad, certeza y sostenibilidad será la verdadera prueba de este nuevo ciclo.